



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ**  
**D.C.**

---

Bogotá D.C., diez (10) de junio de dos mil diecinueve (2019)

**RADICACIÓN:** 11001-33-35-026-2019-00008-00  
**PROCESO:** CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL  
**CONVOCANTE:** **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**  
**CONVOCADA:** MARÍA PAULA FARIAS QUINTANA

La Procuraduría 137 Judicial II para Asuntos Administrativos, remitió solicitud de aprobación o improbación de la conciliación extrajudicial, celebrada entre el apoderado de la convocante **Superintendencia de Industria y Comercio** y la apoderada de la convocada **Johanna Patricia Lotero Prada**, según acta calendada el 20 de diciembre de 2018, celebrada dentro de la Conciliación Extrajudicial No. 33006137-346-2018 del 10 de octubre de 2018, donde se decidió conciliar los valores adeudados por dicha entidad a la convocada al no incluir como parte integrante la asignación básica la reserva especial del ahorro y la posterior liquidación de la **prima de actividad y la bonificación por recreación**, por el periodo comprendido entre el **4 de mayo de 2015 al 4 de septiembre de 2016**.

Por lo anterior y con el fin de cumplir la función encomendada al Juez Administrativo en el artículo 24 de la Ley 640 de 2001, es pertinente **AVOCAR Y DECIDIR LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL**, como sigue a continuación.

**I. PARÁMETROS DEL ACUERDO CONCILIATORIO**

- i.** La entidad convocada, propuso conciliar la inclusión de la reserva especial de ahorro como factor salarial para liquidar los factores salariales devengados por la señora **MARÍA PAULA FARIAS QUINTANA**, denominados prima de actividad y bonificación por recreación, por un monto total de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUATRO MIL CERO SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$1.804.064)**, correspondiente al valor del reajuste de los factores señalados.
- ii.** Se concilió la indexación, junto con los intereses de la suma antes plasmada, no habiendo lugar al pago de los mismos.
- iii.** La parte convocada desiste de cualquier acción legal en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, basada en los mismos hechos que

dieron origen a la audiencia de conciliación, es decir, a la reliquidación de la prima de actividad y bonificación por recreación en los periodos comprendidos en la conciliación.

**iv.** El valor a cancelar corresponde al dinero dejado de percibir por la exclusión de la reserva especial del ahorro en los emolumentos antes citados, en los tres últimos años al momento de liquidar.

**v.** Las sumas reconocidas serán canceladas dentro de los 70 días siguientes a la radicación de la solicitud de pago.

La convocada, a través de escrito radicado el 24 de julio de 2018, manifestó estar de acuerdo con la oferta conciliatoria realizada por la entidad convocante, en su totalidad.

## **II. PRUEBAS**

Como respaldo del acuerdo conciliatorio, se arribó al trámite los siguientes documentos:

**a.** Certificación expedida por el Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual indica los parámetros de la formula conciliatoria (fl.28)

**b.** Por medio de derecho de petición elevado el 4 de mayo de 2018, la señora Farías Quintana, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el reconocimiento y pago de las diferencias generadas en los factores denominados prima de actividad, bonificación por recreación y viáticos, al omitir la Reserva Especial del Ahorro en la liquidación correspondiente (fls. 35-36).

**c.** En respuesta a lo anterior, a través de oficio fechado 28 de mayo de 2018, con radicado 16-253678- - 12-0, la Superintendencia de Industria y Comercio le informó a la señora María Paula Farías Quintana, la decisión de conciliar lo relacionado con el reajuste de la prima de actividad y la bonificación por recreación, incluyendo la reserva especial del ahorro como factor de liquidación, realizando un recuento de la improbación de la conciliación emitida por el Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá, dentro del expediente 2017-232, señalando que dentro del presente asunto, no existe cosa juzgada al tenor de lo dispuesto en el literal c) del artículo 3 del Decreto 1716 de 2009. (fl. 17-18).

**d.** Obra en el plenario, liquidación básica de conciliación, en la cual se puede observar los valores liquidados bajo los parámetros de la formula conciliatoria. (fls. 39-40)

**e.** A folio 41 del plenario, se observa escrito radicado el 24 de julio de 2018 ante la SIC, en el cual la convocada manifiesta estar de acuerdo con la liquidación realizada por la entidad convocante.

**f.** La señora **María Paula Fariás Quintana**, prestó sus servicios a la Superintendencia de Industria y Comercio desde el 30 de enero de 2012 hasta el 4 de septiembre de 2016, siendo su último cargo el de Profesional Universitario (Prov) 2044-10 de la planta global asignado a la Secretaria General – Grupo de Trabajo de Talento Humano. (fl.9).

### III. CONSIDERACIONES

El artículo 24 de la Ley 640 de 2001, enuncia que las actas que contengan conciliaciones extrajudiciales en materia contenciosa administrativa se remitirán dentro de los tres días siguientes al "*Juez o Corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que le imparta su aprobación o improbación*".

Por su parte, mediante la expedición del Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, 1069 de 2015, reglamentario del artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2009, se determinaron los asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa y su artículo 2.2.4.3.1.1.2., estableció lo siguiente:

**“Artículo 2.2.4.3.1.1.2. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa.** Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de los medios de control previstos en los artículos 138, 140 y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.

**Parágrafo 1°.** No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo:

- Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.
- Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.
- Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.

**Parágrafo 2°.** El conciliador velará porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles.

**Parágrafo 3°.** Cuando el medio de control que eventualmente se llegare a interponer fuere la de nulidad y restablecimiento de derecho, la conciliación

*extrajudicial sólo tendrá lugar cuando no procedan recursos en vía gubernativa o cuando esta estuviere debidamente agotada, lo cual deberá acreditarse, en legal forma, ante el conciliador.*

**Parágrafo 4°.** *En el agotamiento del requisito de procedibilidad del medio de control de qué trata el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se entenderá incluida de repetición consagrada en el inciso tercero de dicho artículo.*

**Parágrafo 5°.** *El agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad, no será necesario para efectos de acudir ante tribunales de arbitramento encargados de resolver controversias derivadas de contratos estatales.”*

En este sentido, si bien es cierto que la conciliación prejudicial en materia administrativa es una de las vías más rápidas y no litigiosas para la solución de conflictos, no es menos cierto que debe cumplir con las exigencias requeridas dentro del marco de la Constitución Política, las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1285 de 2009, para su consecuente aprobación.

Así, tenemos que los requisitos para la aprobación del acuerdo extrajudicial son los siguientes, tal como lo señaló la Sección Tercera del Consejo de Estado en providencia del 18 de julio de 2007, Rad .1998-00249-0 1(28106) con ponencia de la Doctora Ruth Stella Correa Palacio:

- “1.** *Que no haya operado el fenómeno de la caducidad (art. 61 ley 23 de 1991, modificado por el arto 81 ley 446 de 1998).*
- 2.** *Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes (art. 59 ley 23 de 1991 y 70 ley 446 de 1998).*
- 3.** *Que las partes estén debidamente representadas y que estos representantes tengan capacidad para conciliar.*
- 4.** *Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea **violatorio de la ley** o no resulte lesivo para el patrimonio público (art. 65 A ley 23 de 1991 y arto 73 ley 446 de 1998).”*

Dichos requisitos deben concurrir simultáneamente, porque al faltar uno de ellos, la conciliación debe ser improbada.

Acorde a los lineamientos expresados, **EL DESPACHO APROBARÁ LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL** por los siguientes motivos:

**1. No ha operado el fenómeno de la caducidad.**

El asunto materia de conciliación es susceptible de reclamarse judicialmente a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), pues se trata del reconocimiento y pago a favor de la señora María Paula Farías Quintana, de la diferencia causada por la no inclusión de

la denominada reserva especial del ahorro como parte integrante de la asignación básica para la liquidación de la prima de actividad y la bonificación por recreación, en su calidad de empleado público de la Superintendencia de Industria y Comercio por el periodo comprendido entre el **4 de mayo de 2015 al 4 de septiembre de 2016**.

Ahora, si bien es cierto que la señora Farías Quintana en la actualidad no se encuentra vinculada con la entidad convocante habida consideración que, la SIC acepta la renuncia al cargo que venía desempeñando a partir del 5 de septiembre de 2016, también lo es, que dentro del presente asunto tampoco se configura el fenómeno jurídico de la caducidad, por cuanto la petición de reconocimiento de los emolumentos aquí discutidos, fue elevada el 4 de mayo de 2018, la respuesta a la misma fue proferida por la entidad el 28 de mayo del mismo año, la cual fue notificada a la señora Farías el 6 de julio de esa misma anualidad; a su turno, la solicitud de conciliación fue radicada ante la Procuraduría General de la Nación el 10 de octubre de ese año, para el entonces, había transcurrió un término de 3 meses y 4 días contados desde la notificación del oficio 16-253678—12-0; la audiencia fue llevada a cabo el día 20 de diciembre de 2018, y la radicación del expediente fue realizado el 16 de enero del año 2019, por lo que el término total transcurrido fue de 3 meses y 7 días contados a partir de la notificación del oficio antes mencionado, sin contar la suspensión que genera la radicación de la solicitud de conciliación ante el ente encargado para tal efecto<sup>1</sup>.

El anterior análisis se plantea, por cuanto el H. Consejo de Estado ha sido enfático en señalar, que únicamente se considera prestación periódica aquella cuyo pago se origina de manera corriente, ocasionado por una relación laboral y que le corresponde al trabajador como remuneración; empero, cuando se ha finalizado el vinculación laboral, estas prestaciones dejan de ser periódicas, salvo que sean aquellas provenientes de cualquier pensión, por lo que únicamente son demandables en cualquier tiempo, aquellas prestaciones periódicas cuya retribución y periodicidad se encuentre vigente<sup>2</sup>.

De lo anterior se colige, que como quiera que la señora Farías Quintana no tiene vinculación vigente con la Superintendencia de Industria y Comercio desde el año 2016, la reclamación objeto de conciliación es susceptible del estudio del fenómeno jurídico de la caducidad, pero como se explicó en líneas

---

<sup>1</sup> Artículo 138 del CPACA *“Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, **dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.***

<sup>2</sup> Sentencia 01393 de 2018 Consejo de Estado

anteriores, dentro del presente asunto no se encuentra configurada tal situación.

Así las cosas, el Despacho precisa que la conciliación adelantada conforme a los medios de prueba allegados al plenario, surte sus efectos para el reajuste de los factores denominados, **prima de actividad y bonificación por recreación**, por haberse omitido la inclusión de la reserva especial de ahorro dentro de la asignación básica y la consecuencial liquidación de dichos factores por el periodo comprendido entre el **4 de mayo de 2015 al 4 de septiembre de 2016**, por haberse presentado la solicitud de reconocimiento el **4 de mayo de 2018**.

Por lo anterior, la convocante tiene derecho al reajuste de los aludidos factores en razón al vínculo laboral que tuvo en ese entonces con la Superintendencia de Industria y Comercio y que no fueron considerados dentro de la liquidación a la servidora pública.

En conclusión, al no haberse reconocido los valores del reajuste por omitir la reserva especial del ahorro en la asignación básica y la posterior liquidación, de los factores denominados **prima de actividad y bonificación por recreación**, a la señora María Paula Fariás Quintana en el periodo comprendido entre el **4 de mayo de 2015 al 4 de septiembre de 2016**, es claro que el medio de control correspondiente no se encontraba caducado y respeta el criterio de prescripción en torno a los derechos laborales que de tres años contados a partir de que se hizo exigible el derecho a reclamar.

## **2. El acuerdo versa sobre derechos económicos disponibles.**

Se observa, que el reclamo se refiere de manera concreta al pago de los valores adeudados por concepto de la omisión de la inclusión de la reserva especial del ahorro en la asignación básica para la posterior liquidación de la **prima de actividad y la bonificación por recreación**, para el periodo comprendido entre el **4 de mayo de 2015 al 4 de septiembre de 2016**, siendo un asunto que si bien concierne derechos laborales ciertos e indiscutibles, son de connotación económica, por lo que son susceptibles de transacción bajo tales condiciones, máxime cuando de lo pretendido y del acuerdo se verifica que el convocante tiene derecho a la prestación reclamada, pues así se desprende de la formula conciliatoria presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

## **3. Las partes están debidamente representadas.**

La parte convocante actúa mediante apoderado judicial con facultades para conciliar, conforme al poder visible a folio 2.

De igual manera, el apoderado de la parte convocada, también lo hizo conforme al poder otorgado y que obra a folio 1° del plenario, en donde se le faculta para conciliar.

**4. El acuerdo no viola la ley, cuenta con las pruebas necesarias y no afecta el patrimonio público.**

Pues bien, la señora María Paula Farías Quintana, según se desprende de la información allegada a la actuación reclamó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el reconocimiento y pago de los valores adeudados por concepto de la diferencia causada por la omisión de la inclusión de la reserva especial del ahorro en la asignación básica para la liquidación de la **prima de actividad y bonificación por recreación**, emolumentos percibidos por la convocante.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en providencia calendada el 10 de mayo de 2001, al desatar la consulta presentada por el entonces Superintendente de Sociedades, en el sentido de establecer la viabilidad del reconocimiento de la prima de servicio y la prima semestral de forma simultanea para los empleados de esa entidad pública, realizó un recuento histórico de la evolución de la Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades Corporanónimas, bajo un criterio temporal en el cual se definió igualmente la titularidad del reconocimiento de algunas prestaciones económicas a favor de los trabajadores y empleados de la entidad.

La Corporación en su momento expresó:

***“1. La Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades – Corporanónimas. Por ser de interés para la consulta, deben destacarse los siguientes puntos en el desarrollo de la actividad de Corporanónimas:***

*1) La resolución 97 de 1946 del Ministerio de Gobierno reconoció la personería jurídica a la Corporación de Empleados de la Superintendencia de Sociedades Anónimas.*

*2) Esta superintendencia había sido creada por la ley 58 de 1931 y su régimen presupuestal fue fijado por el decreto 142 de 1951, cuyo artículo 6° dispuso que las prestaciones sociales de sus empleados serían atendidas por la corporación.*

*3) La resolución 7333 de 1977 del Ministerio de Justicia aprobó los estatutos de la corporación y le autorizó el uso del acrónimo "Corporanónimas".*

*4) La corporación pasó a llamarse Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades -Corporanónimas- y luego fue reestructurada en la llamada "modernización del Estado", mediante el decreto con fuerza de ley 2156 de 1992, el cual determinó que "es un establecimiento público, del orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico"*

*(art. 1º) y la calificó de entidad de previsión social, al establecer su objeto en el artículo 2º en los siguientes términos:*

*"La Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades, CORPORANONIMAS, como entidad de previsión social, tendrá a su cargo el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, económicas y médico asistenciales consagradas en las normas vigentes para los empleados públicos de las Superintendencias de Industria y Comercio, de Sociedades, de Valores, de la misma Corporación, en la forma que dispongan sus estatutos y reglamentos internos, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias".*

*En desarrollo de este objeto, el artículo 3º del mismo decreto enumeró las funciones de la corporación, dentro de las cuales conviene resaltar las dos primeras, a saber:*

- 1. Organizar, dirigir y administrar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, económicas y médico asistenciales de los empleados públicos de las Superintendencias de Industria y Comercio, de Sociedades, de Valores y de la misma Corporación.*
- 2. Atender las prestaciones a que se obligue en favor de sus afiliados, beneficiarios, pensionados y adscritos especiales.*

*5) El decreto ley 1695 del 27 de junio de 1997 dispuso la supresión de Corporanónimas y ordenó su liquidación. En el artículo 12 le asignó a las respectivas superintendencias el pago de los beneficios económicos que ella tenía a su cargo. Este artículo establece lo siguiente:*

*"Pago de beneficios económicos.- El pago de los beneficios económicos del régimen especial de prestaciones económicas de los empleados de las superintendencias afiliadas a Corporanónimas, contenido en los decretos 2739 de 1991, 2156 de 1992, 2621 de 1993, 1080 de 1996 y el acuerdo 040 de 1991 de la Junta Directiva de Corporanónimas, en adelante estará a cargo de dichas superintendencias, respecto de sus empleados, para lo cual en cada vigencia fiscal se apropiarán las partidas presupuestales necesarias en cada una de ellas, en los mismos términos establecidos en las disposiciones mencionadas en el presente artículo".*

*Como se advierte, los beneficios económicos contemplados en el acuerdo 040 de 1991 de la Junta Directiva de Corporanónimas, entre los que se cuentan la prima de actividad anual, llamada anteriormente prima por año de servicio, y la prima semestral que favorecían a los empleados públicos de la Superintendencia de Sociedades quedaron "legalizados" con esta norma de rango legal y mantienen su vigencia."<sup>3</sup>*

Conforme a lo expuesto, es claro que la Superintendencia de Sociedades, asumió el reconocimiento de las prestaciones económicas contenidas en el

---

<sup>3</sup> CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Consejero ponente: CÉSAR HOYOS SALAZAR. Bogotá D.C, diez (10) de mayo de dos mil uno (2001). Radicación número: 1349. Actor: DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Acuerdo 040 de 1991, por el cual se establece el reglamento general de servicios.

Al desarrollar el capítulo de las prestaciones económicas, en el artículo 58 del Acuerdo 040 de 1991, se consagró la reserva especial del ahorro, con el siguiente alcance:

**“Artículo 58. Contribución al fondo de empleados. Reserva especial del ahorro.** Corporanónimas contribuirá con sus aportes al Fondo de empleados de la Superintendencia de Sociedades y Corporanónimas, entidad con personería jurídica reconocida por la Superintendencia Nacional de Cooperativas. Para tal fin pagará mensualmente a sus afiliados forzosos una suma equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) del sueldo básico, prima de antigüedad, prima técnica, y gastos de representación; de este porcentaje entregará Corporanónimas directamente al Fondo el quince por ciento (15%), previa deducción de la cotización que sea del caso por concepto de la afiliación de los beneficiarios. Los afiliados forzosos contribuirán mensualmente al Fondo con el cinco por ciento (5%) de las asignaciones básicas mensuales fijadas por la ley.”

Adicionalmente dicho Acuerdo, determinó que Corporanónimas reconocería y pagaría las primas y demás reconocimientos determinados por la ley.

En lo que respecta a la reserva especial del ahorro, el Consejo de Estado ha determinado que dicho emolumento constituye factor salarial y así fue concebido desde el primer pronunciamiento judicial que sobre el particular hizo la Corporación de cierre de lo Contencioso Administrativo<sup>4</sup>.

Por consiguiente, la liquidación de la reserva especial del ahorro como parte de la asignación básica en razón a su naturaleza salarial, es uno de aquellos elementos que retribuye directamente la prestación del servicio y en el entendido que los artículos 44 del Acuerdo 040 de 1991 y 144 del Decreto 708 de 2009, al fijar la cuantía con fundamento en la asignación básica no excluían la reserva especial del ahorro, circunstancia que ratifica la viabilidad del acuerdo conciliatorio suscrito por la señora **María Paula Farías Quintana** y la **Superintendencia de Industria y Comercio**.

Ahora bien, frente a las calidades particulares de la señora **Farías Quintana**, se tiene que laboró para la Superintendencia de Industria y Comercio ubicada geográficamente en la ciudad de Bogotá, desde el 30 de enero de 2012 hasta el 4 de septiembre de 2016, y cuyo último cargo fue de Coordinadora del Grupo de Trabajo de Talento Humano, adscrito a la Secretaría General (Fl.9).

Que el 4 de mayo de 2018 la convocada, solicitó a la entidad pública el reconocimiento y pago de la reserva especial del ahorro en la liquidación de la asignación básica para la posterior liquidación de la prima de actividad y

<sup>4</sup> CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION SEGUNDA - SUB-SECCION "A". Consejero ponente: NICOLAS PAJARO PEÑARANDA. Santafé de Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1.998). Radicación número: 13910. Actor: ALFREDO ELIAS RAMOS FLOREZ. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

bonificación por recreación, factores afectados con la omisión en la aplicación del 65% de la Reserva Especial del Ahorro (fls. 35-36).

La liquidación de los valores a reconocer a la convocada se encuentra a folio 39 del plenario.

Mediante certificación expedida por el Secretario Técnico del Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio, se señalaron los valores totales objeto de conciliación y respecto de los cuales ha de efectuarse el reajuste, conforme la solicitud presentada por la convocada, atendiendo los siguientes conceptos:

Funcionario y/o exfuncionario público	Fecha de liquidación Periodo que comprende Monto total por conciliar
María Paula Farías Quintana	04/05/2015 al 04/09/2016 \$1.804.064

En lo que respecta a las condiciones en las cuales se cumplirá la obligación contenida en el acuerdo conciliatorio, se tiene que el Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio, determinó que las condiciones generales en materia de las controversias suscitadas en la reliquidación de las asignaciones básicas con inclusión de la reserva especial del ahorro, concretándose en los siguientes lineamientos:

- 3.1.1 Que los convocados desistan de los intereses e indexación correspondientes a la prima de actividad y bonificación por recreación.
- 3.1.2 Que los convocados desistan de cualquier acción legal en contra de la SIC basada en los mismos hechos que dieron origen a la audiencia de conciliación, las anteriores pretensiones y otras que den origen alguna acción legal, deberán ser destinadas por el convocado.
- 3.1.3 Que la SIC con base en las diferentes sentencias en firme en contra de la misma, donde reconoce que la SIC debe liquidar la prima de actividad y bonificación por recreación, reconoce el valor económico a que tenga derecho el convocado por los últimos tres años dejados de percibir, conforme a la liquidación pertinente.
- 3.1.4 Que en el evento que se concilie, la Superintendencia de Industria y Comercio pagará los factores reconocidos en la presente audiencia de conciliación, dentro de los setenta (70) días siguientes a la aprobación del Juez Administrativo y a que la parte convocada presente ante la Entidad toda la documentación necesaria para adelantar el tramite requerido.”

En consecuencia, es procedente que la entidad realice el pago de los valores adeudados a la servidora pública por concepto de la diferencia causada en la omisión de la inclusión de la reserva especial del ahorro como parte integrante de la asignación básica para la posterior liquidación de la **prima de actividad y la bonificación por recreación**, pues como ha quedado evidenciado el convocante tiene derecho a dicho reconocimiento y la entidad realizó las operaciones relacionadas con el recalculo para efectos

prestacionales para el periodo comprendido entre el **4 de mayo de 2015 al 4 de septiembre de 2016**, conforme a la liquidación aportada por la entidad convocante, visible a folio 39 del plenario, y en ese sentido el despacho considera que lo reclamado tiene el sustento legal y jurisprudencial apropiado, es decir, es ajustado al ordenamiento jurídico.

Conforme a ello, se observa que en la liquidación efectuada por la entidad, en efecto se reconoce los valores adeudados por concepto de la diferencia causada en los factores denominados **prima de actividad y la bonificación por recreación**, que se causaron en el periodo antes indicado.

Así las cosas, se tiene que el acuerdo no es lesivo a los intereses y el patrimonio de la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez que se concilió por el valor adeudado al convocado.

#### **5. Orden de conciliar por parte del Comité de Conciliación.**

Según se observa a folio 28 del expediente, que el comité de conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió conciliar el presente asunto, a favor de la señora **MARÍA PAULA FARÍAS QUINTANA**, por la suma **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUATRO MIL CERO SESENTA Y CUATRO PESOS (\$1.804.064)**

Lo anteriormente expuesto permite a ésta Jurisdicción, conforme a lo previsto en el Artículo 73 de la Ley 446 de 1998, que modificó el Artículo 65A de la Ley 23 de 1991, **APROBAR** la Conciliación Extrajudicial suscrita ante la Procuraduría 137 Judicial II para Asuntos Administrativos el día 20 de diciembre de 2018, por el apoderado de la entidad convocante Doctor **BRIAN JAVIER ALFONSO HERRERA** y la apoderada de la convocada, Doctora **JOHANNA PATRICIA LOTERO PRADA**, en razón a que el acuerdo conciliatorio se fundó en un objeto y causa lícitos, sin vicios en el consentimiento de las partes, y sin que con él se lesionen los intereses del Estado, o afecte el patrimonio económico del Ente Público en lo que fue materia de conciliación, pues se trata de efectuar el pago de unos valores adeudados a un servidor público de la rama ejecutiva del poder público.

En relación al plazo para efectuar el pago se determinó que el mismo se realizaría dentro de los **setenta (70) días hábiles siguientes** a la incorporación de la integridad de los documentos necesarios para tal fin.

En virtud de lo expresado, el **JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SECCIÓN SEGUNDA**,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO.- APROBAR LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL** celebrada el 20 de diciembre de 2018, dentro del expediente radicado con el No. 33006 137-

346-2018 del 10 de octubre de 2018, suscrita entre el apoderado de la entidad convocante Doctor **BRIAN JAVIER ALFONSO HERRERA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.023.876.980 y portador de la tarjeta profesional de abogado No. 239.128 del Consejo Superior de la Judicatura, y la apoderada de la convocada, Doctora **JOHANNA PATRICIA LOTERO PRADA**, identificada con cédula de ciudadanía No 1.018.429.764 y portadora de la tarjeta profesional de abogada No. 212.051 del Consejo Superior de la Judicatura, ante la Procuraduría 137 Judicial II para Asuntos Administrativos.

**SEGUNDO.-** De conformidad con lo establecido en los numerales 2º y 3º del artículo 114 del Código General del Proceso, aplicable a esta jurisdicción por remisión del art. 306 del C.P.A.C.A., la Secretaría expedirá copia de este proveído con sus respectivos anexos, la cual prestará merito ejecutivo en los términos del art. 2.2.4.3.1.1.13., del Decreto Único 1069 de 2015.

Para tal efecto, la parte interesada deberá consignar el valor de la certificación que asciende a la suma de seis mil pesos (\$6.000) en la cuenta del Arancel Judicial de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial No. 3-0820-000636-3 del Banco Agrario de Colombia.



**TERCERO.-** Por secretaría, devuélvase el proceso No. 110013335009201700232-00, al Juzgado Noveno Administrativo Oral de Bogotá, el cual fue remitido por dicho despacho en calidad de préstamo.

**CUARTO.-** Una vez cumplido lo ordenado en los numerales anteriores, archívese el expediente.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
**ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO**  
Juez

**FV**

 <b>JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD</b> <b>CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECCIÓN SEGUNDA</b>  Por anotación en <b>ESTADO ORDINARIO</b> notifico a las partes la providencia anterior hoy <b>11 DE JUNIO DE 2019</b> , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)   <b>LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA</b> <b>SECRETARIA</b>
--